

INFORME CHILENO

A reunion DDCA2 - 1974  
segundo semestre

I- INTRODUCCION

Al presentar este informe, nos ha parecido necesario sistematizar al máximo los hechos y sus interpretaciones, ubicándolos en un contexto donde se facilite la comprensión de tendencias y procesos sustantivos, dejando los detalles y fenómenos secundarios para conversaciones o informes coyunturales.

Intentaremos, aún en la complejidad de nuestra situación, plantearnos las preguntas esenciales, directas, profundas y simples que ella sugiere, sin rehuir ninguna y buscando siempre la claridad, el mayor rigor de objetividad y la construcción de una información que permita proyectar estrategias para el futuro.

Desde el punto de vista estrictamente cronológico, existen tres órdenes de preguntas que formularse respecto a la crisis chilena.

El primer orden de preguntas se refiere al pasado inmediato. ¿Cómo fué posible que una República de tan larga y sólida tradición democrática como la chilena se desmoronara tan profunda y estrepitosamente? Dramática cuestión que lleva implícita otra más pertinente y próxima a nuestras responsabilidades y debates: ¿cuáles son las responsabilidades del P.D.C. chileno en la crisis de nuestra patria?

Sabemos que son cuestiones polémicas, porque dividen en su interpretación, según sean los hechos que se tengan presentes, las convicciones íntimas, juicios y prejuicios de cada cual, aún más allá de nuestras fronteras partidarias. Las abordaremos con franqueza y derechamente.

El segundo orden de preguntas, menos polémico, se refiere a la dolorosa realidad que vivimos los chilenos: ¿qué sucede hoy en Chile? ¿qué tipo de régimen es el actual? ¿cuál es la suerte de la D.C. en esta circunstancia?

Finalmente, abordaremos las preguntas que se plantean frente al futuro: ¿cuáles son las perspectivas de la sociedad chilena? ¿cuáles son las perspectivas anheladas, posibles o imposibles, del P.D. C. chileno? De ellas emanan cuestiones de prospectiva y estrategia.

Si bien el criterio es cronológico, intentaremos distinguir estructuras sociales y políticas, cuya característica obvia es su tendencia a ser persistentes; procesos sociales que las modifican en diferentes grados y ocasionan coyunturas más o menos relevantes, por el juego de actores sociales y políticos, uno de los cuales es el P.D.C. de Chile. Actor ni único ni exclusivo, cuyo papel en el sistema a veces ha sido decisivo, en otras ocasiones, principal y en oportunidades, secundario.

Pensamos que sólo un criterio de este tipo tiene valor explicativo, impide la saturación de subjetivismo y muestra hechos y responsabilidades al desnudo.

II- ORIGEN Y DESARROLLO DE LA CRISIS CHILENA

El Estado chileno fué en América Latina una situación original y prematura. Una "República en forma" inició su emergencia y progresiva instalación en los años 30 del siglo pasado. Organización de poderes clásicos, juego político real pero reducido, dieron sello a una sociedad donde el conflicto político no fué desnudo ni brutal, sino que buscaba soluciones sólidos y estables.

Destacamos esta dimensión porque es parte integrante del ser nacional. Más aún: representa la experiencia y la tradición de sucesivas generaciones de chilenos y extranjeros que la vivieron, la conocieron o simplemente la visualizaron así.

Sin embargo, esta realidad institucional no corresponde a una realidad social. Se requiere una exageración gráfica para explicitar la otra dimensión de nuestro país: ¡en Chile hubo, por así decirlo, primero Estado y después sociedad! Ambiente éste menos conocido que el anterior, interiorizado por los intelectuales y expertos de las últimas décadas y generalizado, como el análisis del subdesarrollo y la desintegración social, por los chilenos desde no más de 15 o 20 años a esta parte.

Así, la vida política, singularmente pacífica, pero sin estar exenta de interrupciones críticas, se desarrollaba en una sociedad con la estratificación e inmovilidad típicas del continente.

Dentro de este contexto tiene lugar el proceso de cambio de la sociedad chilena: modernización, democratización y socialización, y se llega a su crisis actual.

Para mayor claridad permítasenos separar:

- a) las estructuras sociales y su transformación;
- b) el régimen político, ligado en su rigidez a su persistencia histórica;
- c) la crisis del sistema: el gobierno de Allende y su caída, y
- d) el papel de la D.C.

### III- EL PROCESO DE TRANSFORMACION SOCIAL

Ya en 1924 la crisis social, determinada por el advenimiento de una clase media que tendía a expandirse y a conquistar posiciones influyentes, quebró el marco institucional mediante una intervención militar que, con variadas vicisitudes y etapas, se prolongó hasta 1932.

Menos agudo, pero más sintomático, fué un prematuro Frente Popular -con inclusión de comunistas- que encauzando las aspiraciones del proletariado industrial ascendente en alianza con sectores medios, irrumpió y triunfó en 1938.

Más próximo a nuestros días fué el fenómeno ibañista, respuesta social al deterioro del radicalismo y a la destrucción de los Frentes Populares. En 1952, en el escenario latinoamericano de Perón y Vargas, el ex dictador General Ibañez concita el fervor popular para una revolución pacífica. Se pone en marcha un fenómeno de movilización y toma de conciencia de sectores marginados de la vida política, económica y social.

El ibañismo, confuso y vacilante, agotó su ciclo facilitando la construcción de cuatro polos políticos, cuyas ideologías y pretensiones les ubican en las escuelas doctrinarias de la primera post- guerra europea: a) el radicalismo, disminuido pero persistente; b) los viejos partidos de derecha, rivales del siglo XIX, que formalizan su alianza total; c) los socialistas, que superando años de conflictos internos, se reunifican y se alían con sus adversarios de ayer: los comunistas; y d) la Democracia Cristiana, que al cabo de años de maduración interior, se convierte en un partido de masas.

Así se formaliza un verdadero ciclo ideológico -Alessandri, Frei y Allende-, que cada cual desde su perspectiva, quiere resolver la aguda desintegración nacional.

En el turno conservador, especialmente los primeros años del Gobierno derechista, se congela el desarrollo social.

La elección de 1964 se realiza en medio de una discusión abierta, apasionada y total, acerca de los rumbos indispensables del cambio social.

El programa triunfante de Eduardo Frei se plantea la crisis integral del país y propone una "Revolución en Libertad" para impulsar la aceleración del cambio en toda la sociedad chilena, tras objetivos de modernización, democratización y socialización.

En lo fundamental, el programa previsto para esa etapa se cumplió. Hechos significativos lo denotan: el crecimiento espectacular en la organización social y en la movilización y conciencia de los actores nuevos; el ingreso a la participación de millones de chilenos, sea a la participación electoral, a la organización sindical y especialmente al mercado económico, a través de un creciente consumo de masas; la expansión educacional en todos los niveles; el acceso del campesino al dominio de la tierra y a un rol protagónico a través de la reforma agraria; un proceso creciente de industrialización, etc.

Como vasos comunicantes, cada grupo comunicaba su toma de conciencia al grupo próximo y se iniciaban nuevas etapas de reivindicación y de progreso colectivo. Un cambio tan drástico daba lugar a tensiones crecientes y acumuladas. El clima ideológico enardecía la polémica y las pugnas. El conservantismo y la izquierda tradicional, convertidos en aliados ocasionales, luchaban por impedir el éxito completo del ciclo demócrata-cristiano.

Aún el clima mundial del debate influía para desarticular a grupos y organizaciones. El Concilio Vaticano II era una revolución insospechada para la conciencia cristiana. La guerrilla endiosada en todo el mundo contagiaba a la juventud en una vía rápida y definitiva para la liberación.

En este clima social, con la conciencia inmediata de vivir en una gran transformación, Chile se aboca a la sucesión presidencias de Eduardo Frei.

#### IV- EL REGIMEN POLITICO

En todo este proceso, lo que menos cambió fué el régimen político. Aún durante la etapa demócrata cristiana, si bien creció de modo impresionante la participación electoral, se mantuvieron casi inalterables los mecanismos, sistemas y procedimientos de los tres poderes clásicos. Las FF.AA. deben ser incluidas en el cuadro de instituciones del Estado con modificaciones insignificantes en su perspectiva para la nueva sociedad en gestación apresurada.

El presidencialismo permitía gobiernos de minoría; pero siempre en una búsqueda permanente e indispensable de consenso, aunque fuera coyuntura por coyuntura. Prácticamente desde los años 30 de este siglo, Chile estaba políticamente dividido en tres sectores: una derecha tradicional de corte capitalista; una izquierda marxista formada por los Partidos Socialista y Comunista, y un centro democrático cuyo eje fue largo tiempo el radicalismo y desde el último decenio, la Democracia Cristiana.

La elección de 1970 enfrentó en una ardiente polémica a tres bloques políticos apenas desiguales en su poderío electoral. Dos de ellos con programas definitivamente revolucionarios y socializantes; el otro, con marcado sello conservador capitalista. Este último y el demócrata cristiano, con acendrada tradición constitucionalista; el otro, con poco disimuladas tendencias violentistas y totalitarias. Si las candidaturas de Tomic y de Allende simbolizaban la abrumadora vocación de cambio de la sociedad chilena, la segunda no escondía su pretensión de cambiar aún las bases o presupuestos filosóficos de la teoría democrática de Gobierno.

Con el mejor derecho que le dió su primera aunque estrecha mayoría relativa, recogiendo la natural consecuencia de la analogía programática para acelerar el cambio y previa aceptación por parte suya y de sus partidos, constituidos en la Unidad Popular, del Estatuto de Garantías Democráticas incorporado a la Carta Fundamental mediante una reforma Constitucional, Allende asumió la Presidencia de la República gracias al apoyo en el Congreso Pleno de todos los parlamentarios demócrata cristianos.

V- EL GOBIERNO DE ALLENDE

El Gobierno de la U.P. se caracterizó desde el comienzo por la profunda contradicción interna entre las tendencias democráticas y totalitarias que bullían en su seno.

El "camino chileno hacia el socialismo", en democracia, pluralismo y libertad, enunciado por el Presidente Allende como la segunda vía histórica, inédita en el mundo, para hacer la transición de capitalismo a socialismo, chocaba con la formación ideológica y el objetivo programático de los dos partidos ejes de su gobierno, Socialista y Comunista, que en conjunto constituían más de los 2/3 de la U.P.- Fieles a la ortodoxia marxista leninista, ambos ostentaban -con distinto énfasis pero con igual convicción- que la instauración del socialismo pasa necesariamente por la dictadura del proletariado, meta explícitamente declarada en múltiples documentos como la búsqueda del "poder total" para el pueblo. Esa tesis era también compartida por el MAPU y sectores de la Izquierda Cristiana -dentro de la U.P.- y por el MIR -fuera de ella-.

La diferencia esencial entre comunistas y socialistas era tan solo de estrategia. Mientras el P.C. y sus seguidores afirmaban la posibilidad de conquistar "la totalidad del poder" por la vía institucional, sirviéndose de los mecanismos de la legalidad burguesa, el P.S., el MIR y demás sectores extremistas creían inevitable el enfrentamiento violento, para lo cual preconizaban sin ambages la vía insurreccional de los hechos consumados y el "poder popular" armado.

El modelo democrático proclamado por Allende, que tantas simpatías conquistó a través del mundo, exigía convertir al Gobierno de Minoritario en la base social y en la vida institucional, en el gobierno de la mayoría. Lograrlo suponía un entendimiento leal con la D.C., lo que le habría asegurado el respaldo abrumador de más de los 2/3 del país y del Congreso Nacional.

Pero la U.P. prefería conquistar para sí sola "todo el poder" y el Presidente no puso o no quiso convencerla de la necesidad de buscar el consenso.

En una primera etapa -hasta las elecciones municipales de abril de 1971- se intentó ganar la mayoría electoral mediante una atractiva política populista de redistribución de ingresos, algunas medidas espectaculares -nacionalización del cobre, estatización de la banca, intensificación de la reforma agraria- y motivación psicológica. El propósito obvio era lograr en esos comicios un respaldo popular que permitiera acto seguido provocar un plebiscito para disolver el Congreso y crear una Cámara única en que el Gobierno tuviera mayoría.

Como esas elecciones solo dieron al Gobierno prácticamente la mitad de la votación, se intentó en una segunda etapa acrecentar ese apoyo mediante la acentuación de dicha política populista, sin medir sus consecuencias económicas, combinada con el empeño de dividir a la D.C. y con un gran esfuerzo para ganar el poder económico, publicitario y cultural y para movilizar a algunos sectores postergados de la población -mapuches, campesinos afuerinos- tras objetivos reivindicacionistas. Con estos fines se puso en marcha una política sistemática destinada a apoderarse de las principales empresas industriales y comerciales, de los medios de comunicación de masas, de las Universidades y de las tierras aún no expropiadas. Para ello se emplearon todos los medios posibles, desde arbitrios administrativos abusivos, franca o solapadamente ilegales, hasta las presiones oficiales o de masas, el desprestigio de personas o las vías de hecho, pero siempre rehuyendo el procedimiento constitucional de someter al Parlamento proyectos de ley.

Si bien esa política acrecentó efectivamente el poder oficialista, no logró los resultados esperados en cuanto apoyo ciudadano. Por el contrario, la natural repulsa que provocaron las arbitrariedades y violencias, la reacción de todos los que se sintieron amenazados por el sectarismo y la prepotencia de la U.P. y los primeros síntomas de la crisis económica que la demagogia gubernativa debía necesariamente generar y que la derecha estimuló al máximo, disminuyeron en vez de aumentar el respaldo electoral del gobierno, como quedó demostrado en las elecciones extraordinarias de enero de 1972.

Se inició entonces una tercera etapa en que la estrategia comunista empezó a ceder paso a la del P.S. El gobierno desistió de lograr la Cámara única y rehuyó el plebiscito sobre las áreas de la economía. Mientras conversaba con la D.C. en busca de acuerdo que nunca se concretaron o que, concertados, no se cumplían, se acentuó la agitación social, la presión de masas, la arbitrariedad administrativa y la acción creciente de grupos armados. El MIR hizo gala de violencia con manifiesto apoyo del P.S. y absoluta impunidad. Al cumplirse dos años del triunfo de Allende, el régimen tenía a su haber más de 60 muertos en acciones violentas.

Por una parte era claro que el Gobierno buscaba imponer un modelo económico estatista, burocrático y totalitario. Por otra, se desencadenaron la inflación y la escasez. Los sectores medios, perseguidos y amenazados, organizaron una resistencia cada vez más vigorosa, que los ultras de derecha tendían a extremar. Un decreto reservando al Estado el transporte terrestre en una región del sur, originó un paro del gremio de camioneros que pronto se transformó en huelga nacional de todos los transportistas, a la cual se plegaron comerciantes y otros sectores. El país se paralizó en un clima de tensión y violencia. La normalidad sólo se restableció cuando el Presidente formó un nuevo ministerio, con participación de las FF.AA. que asumió la tarea de asegurar el orden público, resolver los problemas planteados por los gremios en conflicto y garantizar la corrección de las elecciones generales parlamentarias de Marzo de 1973.

Gobierno y oposición atribuyeron a esos comicios carácter de plebiscito. El anuncio de la U.P. de afrontarlos en "lista única", obligó a la oposición a hacer lo mismo. La campaña electoral se dió en un clima de aguda polarización. El Partido Nacional pedía al electorado los 2/3 para destituir al Presidente; la U.P. acusaba a la derecha de buscar la guerra civil. El P.D.C. intentó en lo posible racionalizar la disputa, pidiendo apoyo mayoritario para una "rectificación democrática".

Los resultados de la elección -56% para la oposición y 43% para el Gobierno- significaron claramente que la mayoría del país, si bien no quería la destitución del Presidente, rechazaba la política del Gobierno y quería su rectificación.

Pero la U.P. se apresuró a manifestar que seguiría imperturbable su camino y que cualquier intento de apartarla de él significaría la guerra civil. El propio Presidente ratificó ese planteamiento en su cuenta al Congreso Nacional el 21 de mayo de 1973.

Sobrevino entonces la cuarta etapa de la estrategia gubernativa: las tesis socialistas del "poder popular" y la "vía insurreccional", desplazaron francamente a las posiciones del P.C., el cual terminó por plegarse a ellas con tímida renuencia. En todas partes se hizo presente la movilización de Consejos Comunales, Consejos Campesinos, Juntas de Abastecimientos y Precios, y cordones industriales, en actitud de imponer su voluntad al margen del orden institucional. La violencia verbal y física de los sectores extremistas -de uno y otro lado- pasó a dar la tónica de la vida cotidiana. Unido ello a la crisis económica -con la consiguiente lucha de cada hogar por el "derecho a comer", amenazada por la distribución sectaria de alimentos y demás bienes esenciales-, al empeño oficialista por imponer de hecho una reforma educacional concientizadora de carácter totalitario, al conflicto jurídico-político por la negativa del gobierno a promulgar las reformas constitucionales sobre áreas de la economía y asignación de tierras a los campesinos, a los intentos ya ostensibles de infiltrar y dividir a las FF. AA. y, por otra parte, a la respuesta cada vez más desesperada de los múltiples sectores sociales afectados, asuzada por la polarización política creciente, llevaron al país a una situación que el Episcopado Católico denunció en estas palabras tan dramáticas como reveladoras: "Chile parece un país azotado por la guerra".

Dentro de este cuadro se produjo, el 29 de Junio, el primer síntoma de rebelión militar. Un regimiento motorizado intentó tomarse la casa de Gobierno. El intento fracasó, dominado por las propias FF.AA.; pero ante el país quedaron sonando las primeras palabras con que el Presidente Allende llamó al pueblo a defenderlo, anunciándole que "tendría armas" para ello.

Desde ese momento los hechos se precipitaron. Las FF.AA., hasta entonces remisas en la aplicación de la ley sobre control de armas, la pusieron en rigurosa ejecución, mientras la U.P. acentuó su ofensiva para dividir las. La tensión social subió de punto con movilización de masas, huelgas, paros y actos de violencia, impulsados tanto por sectores gobiernistas como opositores.

El diálogo entre el Presidente Allende y la D.C., promovido por el llamado de la Iglesia a convenir "una tregua" para "desarmar los espíritus y las manos", no logró su objetivo y el ingreso al Ministerio de los Comandantes en Jefe de las FF.AA. tampoco consiguió restablecer la normalidad, porque gran parte de la UP y especialmente el P.S., no aceptaron ceder nada y prosiguieron imperturbables su estrategia hacia el enfrentamiento. El Presidente permaneció sin definirse entre las tendencias contradictorias que pujaban dentro del Gobierno, sobrevino la anarquía y se produjo el golpe del 11 de Septiembre.

Transcurrido un año desde entonces, se visualizan claramente en el proceso social y político del régimen de Allende, los siguientes caracteres:

- a) acelerada estatización y masificación de la vida económica, social y política. Estatizar y controlar pareció ser la obsesión que determinaba la conducta de la U.P.;
- b) ideologismo alucinante y confuso acerca de la revolución, sin ningún sentido de la realidad, reñido con toda racionalidad económica y totalmente ajeno al modo de ser de la mayoría de los chilenos;
- c) manifiesto desprecio, más allá de las palabras, por la institucionalidad jurídica y política del Estado. De ahí la permanente contradicción entre las palabras del Presidente y los hechos de su gobierno; y
- d) falta, en definitiva, de una conducción política central, capaz de superar los conflictos estratégicos y los sectarismos partidarios del oficialismo y de imponer una conducta concordante con los caracteres que se atribuían a la llamada "vía chilena hacia el socialismo".

Si a estos caracteres se agrega la ceguera y pasión con que los sectores reaccionarios y los intereses heridos se empeñaron en agudizar el conflicto, y las intrigas y presiones internacionales, no es extraño que la experiencia concluyera en un fracaso.

El Gobierno de Allende, que llegó a establecer en Chile el socialismo en democracia, no estableció el socialismo, destruyó la democracia y arruinó la economía nacional.

## VI- PAPEL DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA

Actor principal del proceso político y titular casi exclusivo del Gobierno en la etapa 1964-1970 con éxitos indiscutibles en la modernización y democratización del país, en su recuperación de independencia y apertura a un nuevo destino, el P.D.C. tenía el deber histórico de continuar esa tarea. Aunque pareciera escandaloso decirlo, en 1970 no podíamos perder. Los peligros eran demasiado evidentes. La pugna ideológica, el asomo de la violencia de los ultras -de uno y otro extremo-, la hondura de la modificación social, hacían indispensable la victoria. No fué así, sin embargo, y esta es sin duda nuestra mayor responsabilidad, que compartimos todos los demócrata cristianos, en una u otra medida.

Ya hemos dicho cómo, producida la derrota de 1970, nos pareció lo más consecuente y patriótico contribuir a la elección de Allende sin otra condición que el Estatuto de Garantías Democráticas. Pero es claro que desde ese momento los actores principales pasaron a ser el Presidente Allende y la U.P.- Nosotros, ubicados en la oposición, enfrentamos responsabilidades secundarias.

Toda la política del P.D.C. frente al Gobierno de Allende se inspiró en dos criterios fundamentales: contribuir lealmente a las tareas de socialización en que los programas de Allende y Tomic coincidían y evitar a toda costa que ese proceso de socialización condujera a una dictadura totalitaria. La idea de ser "alternativa democrática" para el proceso de cambios en el futuro, estuvo siempre enmarcada dentro de esos criterios.

Durante los tres años, todas las estrategias y tácticas del Partido, con matices hacia el optimismo o hacia el pesimismo acerca de cual ingrediente -el democrático o el totalitario- prevalecería en la acción del Gobierno, buscaron asegurar la continuidad democrática y obligar a la UP a rectificar sus tendencias totalitarias, derrotándola en las urnas. En esta línea central, con naturales diferencias de matices, hubo efectiva y permanente unidad interna en el Partido.

Ya en Diciembre de 1970, al mes y medio de haberse instalado el nuevo Gobierno, cuando el Congreso Pleno ratificó el Estatuto de Garantías Democráticas, el Senador Irureta, Presidente del Partido, llamó la atención sobre las violaciones en que el gobierno empezaba a incurrir. Ello no fué obstáculo, sin embargo, para que la D.C. apoyara y mejorara el proyecto gubernativo para completar la nacionalización del cobre y ofreciera oficialmente al Presidente el respaldo para impulsar en conjunto la nacionalización de la banca y otras reformas. También le propuso caminos de acuerdo para evitar choques entre la U.O. y la D.C. en elecciones complementarias y para constituir mayorías conjuntas en las municipalidades elegidas en Abril de 1971. Esos buenos propósitos no tuvieron respuesta afirmativa. Por el contrario, el sectarismo de la U.P. pareció ensañarse en la D.C. El asesinato de Edmundo Pérez y la desertión de los camaradas que formaron la Izquierda Cristiana -de la que el propio Allende se jactó como fruto de su "muñeca"-, obligaron al Partido a endurecer su oposición. El 28 de Julio de 1971 Radomiro Tomic decía públicamente:

"La tesis de la unidad del pueblo sostenida por la DC durante la campaña presidencial y reiterada después en varias oportunidades de gran alcance político por las Directivas presididas por los senadores Prado e Irureta, no ha sido aceptada por la UP, a veces con rechazos explícitos. Es en esta actitud negativa, sumada al odioso sectarismo con que han actuado numerosos representantes del Gobierno y de la UP, en donde está la primera causa y la mayor responsabilidad del antagonismo creciente entre la DC y la UP... Debe ser claro para todos que si el Gobierno prefiere que la DC esté en la oposición, el PDC estará en la oposición y hará oposición en forma leal pero resuelta. Que la unidad del pueblo sea un imperativo patriótico y una exigencia indispensable para cualquier proceso revolucionario dentro de la actual realidad chilena, no puede significar en ninguna circunstancia que la DC se haga el harakiri y se resigne a bien morir porque así lo desee la UP".

En Septiembre de ese mismo año, con motivo del despido de 38 trabajadores de una industria estatizada y de la acusación constitucional de la derecha contra el Ministro de Economía Vuskovic, la DC, rechazó esa acusación frente al compromiso del Presidente de reintegrar a los trabajadores y de someter dentro de ese mes al Congreso un proyecto de ley para regular las áreas de la economía. Pero ninguna de esas promesas fué cumplida, lo que obligó al Partido a presentar el proyecto Hamilton-Fuentealba.

Apenas cumplido un año de Gobierno, sus excesos forzaron al PDC a presentar una acusación constitucional contra el Ministro del Interior José Tohá, fundada en su tolerancia a los grupos armados, las violaciones al derecho de reunión y los atropellos a los medios de comunicación de masas. Al anunciarla en un gran acto de masas, el nuevo Presidente del Partido senador Fuentealba, denunció "la tendencia del gobierno, cada vez más marcada, a introducirse por los caminos que

conducen al establecimiento en nuestra Patria de un régimen de violencia, de opresión y de dictadura totalitaria".

Ante la prosecución de esa política y la tendencia gubernativa a escudarse tras las FF.AA., el mismo Fuentealba escribió en Agosto de 1972 una carta pública al Presidente Allende, en la que le representó "el rumbo peligroso y casi suicida que está tomando su gestión de gobierno".

Resumiendo la situación al cabo de dos años de Gobierno UP., en su cuenta al Consejo Plenario de Diciembre de 1972, el Presidente del Partido Renán Fuentealba expresaba:

"Impelido por el confesado afán de socialistas y comunistas de acaparar "la totalidad del poder", toda la acción del gobierno se ha encaminado a centralizar en un Estado omnipotente y administrado por la burocracia marxista-leninista, todo el poder político, económico y social. De ahí su menosprecio a la Constitución y a las leyes, su hábito de proceder al margen del Congreso Nacional, su irritada malquerencia contra las instituciones del Estado, a las que despectivamente califican de "burguesas". De ahí su intento de apoderarse, por la buena o por la mala, de toda la economía del país, sin distinción de empresas grandes, medianas o pequeñas. De ahí su ostensible propósito de controlar todas las organizaciones sociales y de destruir a los que no aceptan convertirse en incondicionales".

Y gregó:

"Si en Chile existe todavía la Democracia y no se ha impuesto definitivamente una dictadura totalitaria, no es por concesión graciosa del Gobierno, sino porque éste no ha podido esclavizar a los chilenos.... A esta altura, la gestión del actual Gobierno está cuestionada a fondo por todos los chilenos, incluso en lo moral.

El pueblo de Chile no acepta los objetivos ni los procedimientos a través de los cuales se ha querido llevar al país hacia un Estado totalitario, a través de un proceso cuyos resultados visibles solo significan un tremendo pavoroso retroceso de nuestro país en su nivel de vida, en su desarrollo económico, en su convivencia democrática y en su unidad nacional.

Es tan grande el rechazo del pueblo a la política del Gobierno, que éste, para mantenerse, ha tenido que parapetarse tras las Fuerzas Armadas".

Después de la elección parlamentaria de Marzo de 1973, el mayor empeño del Partido se puso en obtener la rectificación que el resultado electoral exigía al Gobierno. Y en ningún momento dejó de emplearse para ello, junto al ejercicio de todos los recursos propios de la oposición democrática, el intento de lograr acuerdos con el Gobierno que abrieran paso a una solución política. En nuestro discurso en el Senado, el 11 de Julio de 1973, como Presidente del Partido, "reiteramos nuestra disposición al diálogo racional y democrático" para salvar la institucionalidad amenazada y a fines de ese mes concurrimos a él con el mejor espíritu.

Tenemos la más honda convicción que si ese diálogo fracasó, no fué por culpa nuestra. Dios es testigo de que hasta la víspera del 11 de Septiembre, hicimos múltiples esfuerzos para lograr una solución que salvara la Democracia en Chile. Y sólo El sabe si lo hubiéramos logrado procediendo de otra manera.



VII- EL REGIMEN ACTUAL

La tragedia que vive Chile es el desenlace de un proceso de agotamiento de sus estructuras políticas, económicas y sociales, que en el curso del Gobierno de la UP condujo al país a la anarquía.

Las FF.AA. intervinieron el 11 de Septiembre institucionalmente y tomaron el control absoluto del Estado y de la vida social. Anunciaron que lo hacían para restablecer el orden, la institucionalidad y la normalidad económica y social y que asumían el poder "por el solo lapso que las circunstancias lo exijan".

Al cabo de poco tiempo, el Gobierno así instaurado se apartó manifiestamente de sus objetivos iniciales y en su Declaración de Principios, emitida en marzo último, se define a sí mismo como un régimen autoritario que asume en sus manos "todo el poder político" por tiempo indefinido, que responde a una formulación ideológica en que se mezclan ingredientes de humanismo cristiano con formulaciones nacionalistas, anticomunistas y autocráticas, que profesa una desconfianza y repulsa a "la política" y a "los políticos" y que se atribuye la misión de cambiar "la mentalidad de los chilenos" y crear un nuevo orden político, económico y social para Chile.

Los caracteres de este régimen son de sobra conocidos.

VIII- PERSPECTIVAS

¿Cuáles son las perspectivas? ¿Hacia dónde va Chile?

Sumidos en nuestra realidad, tan dramática como dolorosa, hemos reemprendido un análisis de todos los factores, positivos y negativos, que configuran el cuadro actual y que nos permitirían reiniciar la marcha hacia la Democracia.

Teniendo en cuenta la evolución de la conciencia de la población, sus reservas democráticas, el contexto internacional, la evolución de otros regímenes autoritarios, las tendencias internas de las FF.AA. chilenas, la evolución de otros grupos sociales y políticos y nuestras propias posibilidades de acción, visualizamos las perspectivas, simplificadas al máximo, en una triple posibilidad:

- a) Pasaje de una autocracia a un régimen totalitario, con el concurso de una ideología total de explicación social y política de corte corporativo-nacionalista. Un régimen así, tendría una duración ilimitada, buscaría legitimar el terror con ideología y su eventual éxito se haría en su homogeneidad interna, en el terrorismo de izquierda y en coyunturas internacionales de mayor o menor duración.
- b) Lo que llamaremos "banalización" del país. De un conflicto tan largo y generalizado puede producirse el cansancio definitivo de amplios sectores sociales que alienten alguna perspectiva de vida mejor en otras regiones del mundo. Una desmoralización acentuada, una pérdida de la razón de ser de la vida política, pueden ocasionar una visión sin horizontes para la nación, especialmente si se observa que las sociedades cuya dimensión y empuje se consideran viables para alcanzar el umbral industrial son, cada vez más, conglomerados de naciones o supernaciones.
- c) Pasaje de una autocracia a una nueva democracia con una etapa intermedia de transición modernizadora.

Es la perspectiva más optimista. Es pensable que por destino histórico, composición social y deseo de tener éxito, al interior de las FF.AA. prevalezcan tendencias modernizadoras que faciliten la transición. Ello entrañaría un proceso gradual, difícil, pleno de abismos por la acción u omisión de otros grupos sociales y políticos.

Desde el interior del Partido esta posibilidad se visualiza como viable y la única que podría reencontrar a Chile con su vocación democrática de pueblo libre.

Excluidos de la vida política, sufriendo desconfianzas y persecuciones, los demócrata cristianos chilenos estamos definiendo nuestra actitud futura. Entendemos que nuestra tarea es alcanzar la Democracia, y que ello nos obliga a concebir un nuevo orden institucional, económico y social, capaz de realizar en Chile los valores humanistas y democráticos y de impulsar el desarrollo nacional. Sabemos que ello nos exige una conducta de permanente fidelidad a los principios y, a la vez, de realismo constructivo.

A esta tarea consagramos todos nuestros esfuerzos y para ello requerimos la comprensión y solidaridad de nuestros camaradas demócrata cristianos de América y del mundo.

www.archivopatricioaywin.cl